

Importante Documento Entregó la I. Radical

Contribución a "Autocrítica" de la UP

Los cambios deben hacerse dentro de la ley, sin violencia ni injusticia, señala un documento entregado a la publicidad ayer por el Partido de Izquierda Radical, en que explica los fundamentos de la decisión de ingresar al Gobierno.

El PIR declara que "es indispensable que se ponga fin a toda forma de sectarismo que provoca enorme daño y está despertando rencores y amarguras que envenenan la convivencia nacional".

En materia de reforma agraria los radicales de izquierda están de acuerdo en "la eliminación del latifundio" y agregan que "defendemos y defenderemos la mantención de la pequeña y mediana propiedad agrícola, el derecho a la reserva y que se aseguren formas de propiedad a los campesinos sobre la tierra expropiada".

La colectividad puntualiza que es contraria a toda forma de violencia y exhorta a que se ponga término a las tomas de predios agrícolas, fábricas y viviendas.

Indica, también, que deben definirse claramente las tres áreas de la economía. La extensión del área social debe hacerse en forma planificada, poniendo fin al "espontaneísmo".

AUTOCRITICA

Los planteamientos de la Izquierda Radical son considerados como una contribución a la "autocrítica"

que están haciendo los partidos de la Unidad Popular.

Entretanto, hoy se efectuará una nueva reunión de los principales dirigentes políticos de la Unidad Popular con el Presidente de la República en El Arrayán, para continuar analizando la situación general. De acuerdo con lo que señaló el Presidente Allende ante noche, en la reunión de hoy se tratarán principalmente los temas de la economía y de la agricultura. Ayer se terminó un resumen interno sobre las exposiciones políticas hechas el lunes por los distintos partidos.

Posteriormente, en el curso de la semana, debe entregarse a la opinión pública una declaración oficial con lo resuelto por los 8 partidos de la UP con el Primer Mandatario.

DOCUMENTO DEL PIR

El documento del Partido de Izquierda Radical fue entregado independientemente de las deliberaciones en El Arrayán, pero tiene relación con las materias que se están planteando en este concilio de la UP. Es firmado por el senador Luis Bossay, presidente del PIR, y el diputado Roberto Muñoz Barra, secretario general:

"El Partido Izquierda Radical ha recibido el alto honor de ser llamado a compartir las tareas de Gobierno.

Junto con agradecer es-

ta oportunidad de continuar colaborando, ahora con esta mayor participación, en el trascendental proceso de transformación y liberación nacionales que implica el Gobierno Popular, creemos indispensable, por honestidad política, puntualizar nuestro pensamiento respecto a la inspiración y acción de éste.

Para nosotros, el programa de la Unidad Popular es la herramienta que se dio el pueblo de Chile en las urnas, para iniciar una etapa de profundos cambios que permitan construir en nuestro país una sociedad más libre, justa e igualitaria; es decir, socialista y democrática.

Lo que hizo posible esta unión de partidos y movimientos de izquierda en torno a una acción común fue la aceptación de que cada uno de ellos mantendría "su propia filosofía y sus propios perfiles políticos", y que los cambios prometidos se harían con el más escrupuloso respeto de las libertades y derechos democráticos, en pluralismo ideológico, pluripartidismo y sin violencia ni injusticias. Fue éste el programa que se suscribió y al que nosotros seguimos prestando nuestra adhesión, sin aceptar que deje de cumplirse o se intente desbordarlo.

Nuestro Partido representa grandes sectores de trabajadores manuales e intelectuales, asalariados e independientes, que compar-

(Continúa en la Pág. 8)

Importante Documento

(De la Primera Página)

ten nuestros postulados, socialistas, democráticos, laicos y humanistas. Junto a obreros y campesinos, nos acompañan los sectores medios, los pequeños y medianos productores y comerciantes, de toda la gama de la actividad nacional, artesanos, empleados, profesionales, trabajadores independientes, maestros, artistas, intelectuales y otros.

El Gobierno Popular ha cumplido poco más de un año en el ejercicio del poder y creemos que, en lo esencial, ha realizado una labor de trascendencia en el cumplimiento del Programa, como ser, la recuperación de nuestras principales riquezas básicas, una significativa redistribución del ingreso, la constitución de un área social vigorosa, la disminución de la cesantía, la reactivación de la actividad económica, etc. Sin embargo, no podemos dejar de anotar algunas tensiones que tal vez sean propias de una sociedad que como la chilena renueva sus estructuras básicas para abrir camino a un orden social más humano y justo, pero que pueden llegar a comprometer, si no se las modera, todo el proceso de construcción de ese nuevo orden, y restar a esta tarea el apoyo de los sectores que representamos.

Para evitarlo es necesario que los trabajadores tomen plena conciencia de su papel en la construcción de la nueva sociedad, y comprendan que el traspaso de una empresa al área social o mixta no es mero cambio de patrón o empleador. Para ello es indispensable que se ponga término a toda forma de sectarismo que provoca enorme daño y está despertando rencores y amarguras que envenenan la convivencia nacional. Las empresas y la administración pública no pueden transformarse en parcelas de determinados partidos políticos, por importantes que ellos sean. Para que los trabajadores se sientan realmente incorporados al proceso hay que asegurar real y efectivamente, en los hechos y no en las palabras o las leyes o decretos, su participación en la administración y dirección de todas las empresas en las que laboran. Sólo así se impide que la ampliación del poder estatal afecte las bases del régimen democrático y libertario que el pueblo chileno obtuvo tras largas luchas y que la noble inspiración de construir una sociedad socialista derive en un burocratismo que rechazamos.

En materia de Reforma Agraria coincidimos en que es de absoluta necesidad eliminar rápidamente el latifundio, pero sin violencias ni despojos y dentro de un escrupuloso respeto a la ley vigente, modificándola si fuera necesario. Defendemos y defenderemos la mantención de la pequeña y mediana propiedad agrícola, el dehecho a la reserva y que se aseguren formas de propiedad de los campesinos sobre la tierra expropiada. Propiciamos que la calificación de la buena o mala explotación de la tierra se haga a través de mecanismos técnicos que garanticen una decisión justa, eliminando la posibilidad del abuso. Debe intensificarse la asistencia técnica y crediticia, rectificando en cuanto procediere, la acción de los organismos públicos a quienes corresponde prestarla. Creemos además que sólo garantizando a todos los agricultores un clima de seguridad y certidumbre se podrá obtener un adecuado abastecimiento alimentario de la población.

Sostenemos con gran convicción que sin el apoyo y la colaboración activa de la esforzada clase media chilena, de los pequeños y medianos productores y comerciantes, es imposible la construcción de una sociedad socialista, y que su presencia no sólo es indispensable en esta etapa, por meras razones tácticas, sino que además debe asegurarse un lugar importante en la sociedad más justa y solidaria que pretendemos construir. Para ello es preciso además que se les otorgue la influencia y participación que les corresponde en la conducción de los asuntos públicos.

Se comete un gravísimo error al permitir que estos sectores que nada tienen en común con los poderosos y sus privilegios, terminen confundidos con éstos por meras razones de defensa y protesta. Para que la causa de la Unidad Popular recupere la voluntad de esos sectores que se ha ido paulatinamente enajenando, es premioso y urgente que el Gobierno les garantice las condiciones de confianza y certidumbre que requieren para trabajar. La falta de ellas crea problemas económicos que están lejos de conformar el cuadro alarmista que pintan los adversarios políticos, pero que si no se corrigen oportunamente pueden poner en peligro el proceso de renovación en que todos estamos empeñados y además agravar situaciones inflacionarias y de abastecimiento que son de abastecimiento que son hábilmente magnificadas y explotadas para deteriorar la imagen del Gobierno Popular.

Somos contrarios a toda forma de violencia, venga de donde viniere. Con la misma energía que repudiamos a quienes pretenden trastocar el proceso democrático de cambios en nuestro país, en amparo de mezquinos intereses, lo hacemos con aquellos otros extremistas cuya acción descontrolada sólo está trayendo como fruto que los sectores medios e independientes resten su apoyo al programa, como ya se apreció en las últimas elecciones complementarias, especialmente en Linares.

Debe ponerse término no sólo en las declaraciones sino en los hechos a las "tomas" de predios agrícolas, fábricas, viviendas, etc.; todas ellas, al repercutir en la confianza de los productores, están provocando un daño económico que puede hacerse irreparable.

Deben restituirse a la mayor brevedad los medios de producción de que han sido ilegalmente despojados los pequeños y medianos agricultores y empresarios.

De una vez por todas deben delimitarse las tres áreas de la economía, a fin de que los productores y comerciantes encuentren seguridad para desplegar sus iniciativas creadoras sin que los asalte el temor o los abrume la incertidumbre, pues estamos convencidos de que sólo así podrán estar ciertos que en el nuevo orden hay un lugar para ellos, que la sociedad necesita de su esfuerzo.

Es indispensable fijar de modo claro, preciso y definitivo las empresas que pasarán al área social o mixta, pero con criterio técnico y según los términos del programa de la Unidad Popular que no persigue sancionar a nadie ni favorecer intereses partidistas, sino crear una poderosa herramienta de orientación y desarrollo de la economía nacional. Y determinadas cuáles son estas empresas, no sólo debe asegurarse a las restantes su permanencia para hoy y para mañana, sino además hay que dar un vigoroso impulso al área de propiedad privada, corrigiendo los vicios de que pueda adolecer. Sólo con esta complementación de todos los sectores productores puede asegurarse que nuestro proceso de cambios no estará expuesto a los retrocesos que lo han frustrado o retardado en otras latitudes y habremos logrado probar al mundo que las transformaciones y avances pueden hacerse sin violencias ni despojos y sin perder ninguna de las conquistas democráticas alcanzadas, antes por el contrario, ampliándolas real y efectivamente a todos los sectores del país.

Creemos que en ningún caso los conflictos laborales pueden utilizarse para transferir al área social o mixta empresas que no figuren en la determinación legal que exigimos. Es éste un principio que estimamos indispensable para llevar tranquilidad al área económica privada.

El Gobierno Popular con su política distributiva ha logrado un empleo casi óptimo de la capacidad instalada del país, y, sin embargo, ya nos hemos encontrado con problemas de abastecimiento que sería un error disimular y que deben corregirse. Desde este punto de vista, advertimos con alarma que en el año 1971 la inversión global disminuyó en un 8%, lo que significa que la inversión privada decreció aproximadamente en un 20 por ciento. Sólo nuevas inversiones que aumenten la

capacidad para producir bienes de consumo popular o corriente impedirán que se agudicen las actuales deficiencias que se notan en algunos rubros. Hay que facilitar al máximo la importación de repuestos, pues de otra manera se corre el riesgo de reducir la capacidad productiva instalada, con las consecuencias que son previsibles.

Igualmente pensamos que la extensión del área social exige ahora más que nunca una planificación de la economía que señale las metas que deben irse alcanzando, y ponga fin al "espontaneísmo", perjudicial, y la vez que el Presupuesto de la Nación se transforme en un instrumento de la política planificada.

La política tributaria no puede insistir más en cargar su incidencia en los sectores de ingresos medios, incluyendo, por cierto, los pequeños y medianos empresarios, sino que, por el contrario, debe liberarlos de parte de la pesada carga que se ha ido echando sobre sus hombros, y buscar los mayores rendimientos en el control de los impuestos que ya existen.

Rechazamos la complicada maraña de trámites y formularios en que perecen muchas iniciativas creadoras y que, aún cuando puedan obedecer a razones de planificación y control, se traducen en un burocratismo asfixiante.

Las últimas elecciones complementarias confirman que la mujer no se ha incorporado plenamente al proceso de renovación de nuestra sociedad. Hemos sido los impulsores en Chile de la liberación femenina. Creemos que ahora es necesario poner el acento en los problemas grandes y pequeños que la afectan en el hogar y en el trabajo. Además de su natural repudio a la violencia en todas las formas, la madre chilena afronta la inseguridad de sus seres queridos ante el extremismo, la carencia de una adecuada protección policial y la acción de elementos descalificados que pueden arrastrar a sus hijos a las drogas, la delincuencia y otros atentados contra su formación y porvenir. Debe hacerse cuanto está a nuestro alcance para asegurar sin problemas ni trámites el acceso de todos a la educación, a una sana recreación, a las prácticas deportivas y al descanso. Y para la mujer que trabaja es indispensable proporcionarle un lugar seguro donde dejar sus hijos, y allivarle, dentro de lo posible, los problemas domésticos y de la vida diaria que tanto complican su existencia.

Debe procurarse a la mayor brevedad la real igualación jurídica, económica y de oportunidades de la mujer, y medios expeditos para hacer efectiva la responsabilidad paterna; nuestro partido exigirá el más pronto envío al Congreso de las leyes necesarias para este objeto.

No hemos pedido el ingreso al Gobierno. Se nos ha llamado a formar parte de él, y hemos creído que nuestra responsabilidad nos imponía aceptar este ofrecimiento. Pero reiteramos que la Izquierda Radical no le interesa el poder por el poder, sino en cuanto pueda, desde el Gobierno, realizar una acción en favor de los trabajadores, y en especial, de los sectores medios y de los productores y comerciantes modestos, presos hoy de una inquietud que sería culpable no destacar y reconocer.

Luis Bossay Leiva, presidente; Roberto Muñoz Barra, secretario general.